



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

50963/2016

ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I. Contra la Resolución DI CRSS registrada bajo el nro. 83/16, que desestimó la solicitud de revisión interpuesta contra la Resolución DV TJSN 489/15, el contribuyente dedujo recurso de apelación.

Verificado el plazo y cumplimiento del recaudo establecido por el art. 12 de la ley 21.864, 26 inc. b) de la ley 24463 y arts. 15 segundo párrafo de la ley 18.820 y 6 punto 1) de la resolución 877/92 (ANSeS), corresponde analizar las cuestiones debatidas en autos.

II. En orden a los planteos sometidos a conocimiento de esta instancia, cabe referir que las actuaciones se originan en las verificaciones realizadas a partir de la O.I. 827.213 en virtud de la cual se determina deuda por aportes y contribuciones al régimen de Seguridad Social por los períodos individualizados en las Actas de Inspección e Infracción agregadas, de las que surgen diferencias en las remuneraciones declaradas, fechas de altas y falta de pago de las obligaciones de algunos trabajadores.

A fs. 569/570, obra resolución administrativa que admite parcialmente la impugnación formulada, y deja sin efecto el ajuste correspondiente a los trabajadores allí detallados. Contra ello se dedujo revisión administrativa que es desestimada a fs. 615/617 conforme los argumentos del dictamen agregado a fs. 593/614.

Del recurso de apelación pueden extractarse, sucintamente, los siguientes agravios. En primer lugar se alza respecto de la valoración de la prueba aportada, sobre la base del valor reconocido a las declaraciones prestadas durante el relevamiento que presentan diferencias respecto de la fechas de inicio de actividades y la remuneración efectivamente percibida, considera que en los testimonios brindados posteriormente se habrían rectificado las diferencias presuntamente constatadas: En segundo lugar, respecto de los empleados Tatiana Jesús Bertoni, Leandro Díaz; Rojas Cristian Javier, Gómez Florencia, Alegre Jonathan y Vargas Camila Macarena, sostiene la improcedencia del cargo formulado por cuanto resulta de aplicación el art. 2º de la ley 24.241 por tratarse de menores de edad a la fecha de los períodos reclamados. Por último, sostiene la improcedencia de la sanción determinado en atención a la falta del elemento subjetivo que configure su aplicación.

III. Sobre la primera de las cuestiones en crisis, a fs. 564/565, el organismo relata que los ajustes sobre la base la diferencias en la remuneraciones informadas no lo fuern en virtud de pagos variable en razón de las horas trabajadas, sino que el ajuste se origina por la diferencia entre la remuneración fija para un mes determinado y aquella que denuncia la rubrada en sus declaraciones para el mismo mes. Asimismo, consigna que el contribuyente aportó recibos de sueldo que, en la mayoría de los casos, no se corresponden con el mes ajustado.

En tales condiciones, sin que expresamente se rebatan las manifestaciones de AFIP, los genéricos argumentos vertidos sobre la base de la prueba aportada y valorada, no logran desvirtuar lo decidido sobre el particular pues, no resulta irrazonable la conclusión a de la autoridad administrativa al entender que merece mayor fe probatoria lo actuado por sus funcionarios y que los elementos probatorios acompañados por la sumariada en su





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

defensa -declaraciones rectificatorias de sus dependientes, recibos de sueldo y copias de los contratos laborales suscriptos-, que fueron elaborados por ella. En efecto, el fenómeno del trabajo parcialmente clandestino o "en gris" -como suelen calificarlo algunos autores- es común en nuestra realidad laboral, y se da mediante la inserción en los recibos de sueldo de una fecha de ingreso posterior a la real o la consignación de una retribución inferior a la pactada (arts. 9 y 10 de la ley 24.013). Por ello, habiendo el organismo de control determinado la existencia de estos supuestos, sin que los elementos probatorios acompañados por la empresa alteren tal conclusión -ya que se tratan de documentos unilateralmente elaborados por ella y de declaraciones de sus propios dependientes que rectifican lo espontáneamente manifestado ante los funcionarios del organismo actuante pero sin que sus afirmaciones tengan la validez y espontaneidad que cabe esperar, corresponde convalidar lo resuelto sobre el particular por la agencia de recaudación (en igual sentido ver exp. 11927/2005, "COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO 16 DE OCTUBRE LTDA. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda", Boletín de Jurisprudencia n° 50, Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II).

En relación a los reclamos vinculado a los trabajadores menores de edad si bien están excluidos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y, en consecuencia, no corresponde realizar ni aportes ni contribuciones, así como tampoco al Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados.

En cambio, sí se deben efectuar los aportes y contribuciones con destino a la obra social, Fondo Nacional de Empleo, ANSSAL, asignaciones familiares y riesgos del trabajo.

En este contexto, la defensa esgrimida únicamente a partir de la cita expresa del artículo 2° de la ley 24241, no constituye razón suficiente para exceptuarlo de las cotizaciones de los restantes sistemas que integran el SUSS.

Que por último, en el caso de multas derivadas del incumplimiento de las obligaciones para con los sistemas de seguridad social, la sola constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor. El elemento subjetivo no tiene relevancia, dado que la sanción tiene por finalidad la falta objetivamente considerada y no la intencionalidad de la parte.

La RG 1566, no es una norma penal, sino que se trata de una disposición que se limita a fijar el monto de la sanción -entre un máximo y un mínimo- establecida por la Ley N° 17.250, a los efectos de evitar arbitrariedades por parte de los funcionarios en la aplicación de la misma y tiene por finalidad castigar el ingreso tardío de los aportes necesarios para el financiamiento del sistema.

Dicha norma establece que una vez verificada la infracción, se aplica una multa cuyo porcentaje sobre el total omitido se gradúa en relación al tiempo transcurrido desde el vencimiento de la obligación y el efectivo ingreso del monto adeudado, sin atribuir relevancia a las circunstancias de hecho de índole subjetiva para eximir o atenuar la multa correspondiente (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.07.07 -y aclaratoria del 17.05.07-, "Urbani, Ricardo Luis").

En tales condiciones ha de rechazarse el planteo dirigido contra sanción económica derivada del incumplimiento en tiempo y forma.

IV. En referencia a las restantes cuestiones alegadas, se omite pronunciarse por considerarlo inconducente para la solución del conflicto suscitado en autos. En tal sentido el Alto Tribunal ha señalado que "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo aquellas que se estimen decisivas para la correcta solución del litigio y el fundamento de sus conclusiones" (CS, nov 4/97 "Wiater c/Min. de Economía", LA LEY, 1998-A, 281). De esta suerte se reitera una doctrina expuesta en múltiples ocasiones, merced a la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por

Fecha de firma: 15/02/2024

Alta en sistema: 28/02/2024

Firmado por: FERNANDO STRASSER, JUEZ DE CAMARA - SUBROGANTE

Firmado por: SEBASTIAN EDUARDO RUSSO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JAVIER BENITO PICONE, SECRETARIO DE CAMARA



#28579056#398619766#20240208132522785



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

los litigantes y de analizar los argumentos que a su juicio, no sean decisivos (Fallos: 272:225; entre otros).

En atención a los fundamentos expuestos, el Tribunal **RESUELVE**: 1) declarar formalmente admisible el recurso deducido, hacer lugar al mismo y revocar la resolución determinativa de deuda; y 2) sin costas en la Alzada (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

